

Panorama del Ambiente

Habilitante

Bolivia

Octubre de 2025

Contexto

En Bolivia, el ambiente habilitante para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se encuentra tensionado por distintos factores que limitan su pleno desenvolvimiento. El respeto y la protección de las libertades fundamentales atraviesan un escenario complejo, en el que la libertad de prensa y de expresión han sido especialmente vulneradas. Entre enero y agosto se registraron [120 vulneraciones a la libertad de prensa y 38 a la libertad de expresión](#), caracterizados por agresiones contra periodistas, que van desde violencia verbal y física hasta censura y amenazas. A ello se suma la instrumentalización de la justicia en procesos electorales, esto enmarcado en los comicios generales realizados este año, lo que ha puesto en riesgo la autonomía del Órgano Electoral y ha generado incertidumbre al proceso electoral, derivando también en impactos significativos para el entorno de la sociedad civil.

El proceso electoral, realizado el 17 de agosto y la segunda vuelta el 19 de octubre, se ha visto afectado por la instrumentalización de la justicia, que, a través de decisiones de salas constitucionales departamentales, condicionó y puso en riesgo las elecciones nacionales en más de una ocasión. Dos ejemplos son: [el fallo de la Sala Constitucional del Beni](#), que admitió una acción de cumplimiento contra el Tribunal Supremo Electoral solicitando la cancelación de la personería jurídica del Movimiento Tercer Sistema (MTS), y la [resolución de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz](#), que anuló el congreso nacional del MTS por presunta vulneración de derechos políticos. Estas acciones, aunque no prosperaron en sus fines, reflejaron una judicialización del proceso electoral, comprometiendo la autonomía del órgano electoral y la realización efectiva del proceso electoral.

A este escenario se suman las múltiples crisis que atraviesa el país y que se han profundizado desde 2024. Este año, la crisis económica se ha visto agravada con la escasez de dólares y el encarecimiento de los precios de los productos de la canasta familiar. También ha provocado problemas en la adquisición de gasolina y diésel subvencionados, provocando no sólo largas filas de vehículos en diferentes puntos del país para adquirir carburantes, sino la paralización del aparato productivo en el oriente boliviano. La crisis social, provocada por manifestaciones y protestas ante la falta de dólares y carburantes, y la crisis institucional, por la pérdida de confianza y desatención a las demandas de diversos sectores de la población, han complejizado el entorno en el que se desenvuelven las organizaciones de la sociedad civil.

1. Respeto y protección de las libertades cívicas fundamentales

El grado de vulneración en el que se encuentran periodistas y trabajadores de medios de comunicación en Bolivia se ha intensificado por el escenario electoral (Bolivia celebró elecciones generales el 17 de agosto y un balotaje entre Jorge Tuto Quiroga, de la agrupación Libre, y Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, el 19 de octubre, con victoria para este último) y por las múltiples crisis que atraviesa el país. De acuerdo con el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, entre enero y agosto se han identificado [120 vulneraciones](#) a la actividad periodística, caracterizadas por violencia verbal y física, estigmatización, violencia de género, amenazas y censura contra el trabajo periodístico. Particularmente, en el último periodo, [el trabajo de periodistas se ha agravado por la polarización electoral y la intolerancia ejercidos por candidatos, grupos o militantes de partidos](#) que, a través de la descalificación e intolerancia, han entorpecido el acceso y difusión de información mediante discursos estigmatizantes y ataques a periodistas en cobertura electoral. Esta situación no sólo muestra la indefensión en la que se encuentra el sector

periodístico, sino las limitaciones al acceso a la información pública, el debate plural y las restricciones a la libre expresión.

2. Marco legal favorable para el trabajo de los actores de la sociedad civil

El marco legal del país no facilita el registro y funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil, primordialmente porque se trata de procesos “complejos, largos, costosos y a menudo sujetos a decisiones arbitrarias de funcionarios públicos”.

En mayo de 2025 se presentaron dos nuevas denuncias públicas de obstrucción a la obtención de personería jurídica: una de la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares y otra de la Asociación Alianza Boliviana de Cuidados Paliativos, que desde el 2020 sufren reiteradas observaciones y dilaciones en los trámites ante el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Algo similar atravesó la Fundación Internet Bolivia. A través de una entrevista, el director de esta organización dio a conocer que, en septiembre de 2025 logró obtener su personería jurídica de parte del Viceministerio de Autonomías, luego de ocho años de trámites. Este y otros casos reportados en anteriores informes muestran el riesgo a la libre asociación y principalmente al funcionamiento y a la autodeterminación de las organizaciones de la sociedad civil.

Si bien el resultado fue positivo en este caso, la burocracia y los tiempos de espera para lograr la obtención de documentos que permitan la legalidad de las OSC constituyen una constante que continúa vulnerando el derecho a la asociación. Casos como la división de una organización de futbolistas agremiados por actores privados o de organizaciones de vecinos, muestran que, además de tropezar con la tramitación legal de la organización, la desarticulación y ataque permanente a organizaciones legítimas sigue siendo un problema latente que afecta el entorno propicio de las OSC en Bolivia.

3. Recursos accesibles y sostenibles

En la Consulta Nacional sobre entorno propicio y habilitante para las OSC realizado por UNITAS en 2024, se identificó que el apoyo financiero de los socios para el desarrollo hacia las organizaciones de la sociedad civil “ha disminuido en términos de montos y previsibilidad/duración, lo que dificulta un compromiso sostenido de las OSC con el desarrollo y la promoción y defensa de derechos”.

Sin embargo, las limitaciones no se restringen únicamente al apoyo financiero de la cooperación, sino que también se observan en los recursos destinados por el nivel central del Estado. De los fondos que se dirigen a organizaciones de la sociedad civil o a la Academia, se ha conocido el caso de uno que, en septiembre de 2025, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la estatal petrolera, decidió cancelar. Era un fondo para investigaciones sobre la calidad del combustible que recibía el Instituto de Investigaciones Mecánicas y Electromecánicas de la Universidad Mayor de San Andrés. El fondo fue suspendido de manera abrupta, en una fase de la investigación sobre la calidad de carburantes importados por el Estado, en un contexto ya marcado por la crisis económica y la escasez de dólares.

Este hecho evidencia un problema más profundo: la discrecionalidad con la que se administra el acceso y la sostenibilidad de fondos estatales. Esta práctica no solo impacta en la autonomía de la academia, parte fundamental del tejido social boliviano y un actor clave en

la producción de conocimiento riguroso, sino que también limita la labor de investigación y monitoreo que realizan las organizaciones de la sociedad civil, esenciales para garantizar el acceso a datos y evidencia. Además, somete tanto a OSC como a instituciones académicas a condiciones implícitas que desalientan análisis críticos o hallazgos que puedan incomodar a entidades públicas, debilitando así la transparencia, la participación informada y la capacidad colectiva de exigir mejoras en políticas públicas.

4. Estado abierto y receptivo

La interacción entre la sociedad civil y el Estado en Bolivia continúa siendo débil y fragmentada. Persiste la limitada inclusión de las OSC en los procesos de consulta para el diseño, planificación y monitoreo de las políticas públicas y de desarrollo. No obstante, se han identificado algunos espacios de coordinación y articulación, particularmente en el ámbito de los derechos humanos, donde ciertas OSC han establecido [vínculos de trabajo colaborativo con instituciones como la Defensoría del Pueblo](#), a través de la [firma de convenios](#) y acciones de formación e incidencia conjunta. Esto también refleja cómo instancias públicas específicas han adoptado no sólo un discurso, sino una apertura al trabajo conjunto con las OSC, en este caso particular vinculado a temas de acciones para aminorar la conflictividad social y promover el voto informado, en el marco de las elecciones nacionales del 17 de agosto.

Asimismo, se ha establecido un proceso de intercambio técnico con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que incluye la participación de OSC, con el objetivo de revisar y proponer ajustes a la Resolución Ministerial 060 —la cual aprueba el Reglamento de Evaluación y Seguimiento de Programas y/o Proyectos Ejecutados con Recursos de Donación, Cooperación Nacional o Internacional—, en atención a las observaciones planteadas por las OSC, [que la consideraron restrictiva de la libertad de asociación](#). Este proceso de revisión conjunta ha dado resultados importantes, ya que la norma ha sido modificada atendiendo en buena medida a las preocupaciones expresadas.

Estos esfuerzos, aunque puntuales, evidencian la posibilidad de generar mecanismos de diálogo institucional, aún en un contexto general de baja y permanente interlocución sistemática.

5. Cultura pública y discursos favorables hacia la sociedad civil

Los conflictos electorales en Bolivia han propiciado narrativas que inciden negativamente en el ambiente habilitante, incluyendo discursos estigmatizantes y prácticas de censura. Por ejemplo, autoridades del Ejecutivo nacional han emitido [declaraciones descalificadoras contra candidatos de la oposición](#), así como actos de [censura contra figuras públicas](#).

Los discursos también estuvieron dirigidos a medios de comunicación. En septiembre, luego de que dos verificadores de noticias, Chequea Bolivia y Bolivia Verifica —ésta última que nace del trabajo de la Fundación para el Periodismo— identificaran como auténtico un mensaje racista de la cuenta de X del candidato a la vicepresidencia de la Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, ambas iniciativas [sufrieron una serie de ataques y estigmatizaciones](#) a su labor por parte de actores ligados a esta organización política. Estos discursos pueden generar un clima de hostilidad y autocensura contra las OSC, y alientan a un ambiente de autocensura sobre temas sensibles por miedo a represalias.

En contraste, es oportuno reiterar los [vínculos de trabajo colaborativo con instituciones como la Defensoría del Pueblo](#) que organizaciones de la sociedad civil han instaurado, a través de la [firma de convenios](#) y acciones de formación e incidencia conjunta. Esta colaboración supone un esfuerzo conjunto de la sociedad civil y la Oficina del Defensor del Pueblo para combatir la desinformación en el contexto electoral o aminorar la conflictividad social, lo que no solo promete tener un impacto positivo en el discurso público general, sino que también pone de manifiesto la percepción que tiene la Defensoría del Pueblo de la sociedad civil como socio constructivo en la promoción del voto informado y actor estratégico para frenar cualquier tipo de violencia en el marco electoral.

6. Acceso a un entorno digital seguro

El entorno digital en Bolivia es bastante complicado para las y los periodistas. De acuerdo con datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, entre enero y agosto de este año se han presentado cuatro [casos de ciberacoso](#) a periodistas por su labor informativa, éstos se caracterizan por [amenazas de muerte a periodistas, amedrentamientos y ataques a cuentas específicas](#). Por otro lado, se ha presentado en agosto un caso de ciberacoso contra el candidato a la presidencia Andrónico Rodríguez, que sufrió [un ataque cibernetico a su sitio web oficial](#).

La [Misión de Observación Electoral de la Unión Europea](#), en su informe preliminar de las elecciones nacionales, precisa que las elecciones nacionales se vieron afectadas por desinformación cada vez más sofisticada, relacionada a encuestas falsas, supuestos fallos en el sistema informático electoral y denuncias de colusión dentro del Tribunal Supremo Electoral para alterar los resultados electorales.

Estas acciones y amenazas pueden inhibir un entorno digital seguro para las organizaciones de la sociedad civil, más aún si no existen señales claras desde el Estado para frenar la violencia digital y las campañas de desinformación.

Retos y oportunidades

El entorno digital en Bolivia es bastante complicado para las y los periodistas. De acuerdo con datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, entre enero y agosto de este año se han presentado cuatro [casos de ciberacoso](#) a periodistas por su labor informativa, éstos se caracterizan por [amenazas de muerte a periodistas, amedrentamientos y ataques a cuentas específicas](#). Por otro lado, se ha presentado en agosto un caso de ciberacoso contra el candidato a la presidencia Andrónico Rodríguez, que sufrió [un ataque cibernetico a su sitio web oficial](#).

La [Misión de Observación Electoral de la Unión Europea](#), en su informe preliminar de las elecciones nacionales, precisa que las elecciones nacionales se vieron afectadas por desinformación cada vez más sofisticada, relacionada a encuestas falsas, supuestos fallos en el sistema informático electoral y denuncias de colusión dentro del Tribunal Supremo Electoral para alterar los resultados electorales.

Estas acciones y amenazas pueden inhibir un entorno digital seguro para las organizaciones de la sociedad civil, más aún si no existen señales claras desde el Estado para frenar la violencia digital y las campañas de desinformación.

Esta publicación fue financiada/cofinanciada por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del autor y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.

EU SEE

SUPPORTING
AN ENABLING ENVIRONMENT
FOR CIVIL SOCIETY



Funded by
the European Union

Hivos
people unlimited

CIVICUS

**DEMOCRACY
REPORTING
INTERNATIONAL**

**European
Partnership for
Democracy**

forus CONNECT
SUPPORT
INFLUENCE

**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
the global coalition against corruption